



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS I

RAJ.1007/2024

TJ/I-52103/2023

ACTOR: DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

OFICIO No:TJA/SGA/I/(7)2610/2024

Ciudad de México, a 07 de junio de 2024

ASUNTO: CERTIFICACIÓN Y DEVOLUCIÓN

**LICENCIADA OFELIA PAOLA HERRERA BELTRÁN
MAGISTRADA TITULAR DE LA PONENCIA TRES DE
LA PRIMERA SALA ORDINARIA DE ESTE H. TRIBUNAL
P R E S E N T E.**

Devuelvo a Usted, el expediente del juicio de nulidad número **TJ/I-52103/2023**, en **73** fojas útiles, mismo que fue remitido para sustanciar el recurso de apelación señalado al rubro, y en razón de que con fecha **DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO**, el pleno de la Sala Superior de este Tribunal emitió resolución en el mismo, la cual fue notificada a la parte actora el **TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO** y a la autoridad demandada el **DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, y toda vez que ha transcurrido en exceso el término para que las partes interpusieran medio de defensa alguno (Amparo o Recurso de Revisión), con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, vigente al día siguiente de su publicación, el primero de septiembre de dos mil diecisiete en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y el artículo 15 fracción XIV del Reglamento Interior vigente a partir del once de junio de dos mil diecinueve, se certifica que en contra de la resolución del **DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO**, dictada en el recurso de apelación **RAJ.1007/2024**, no se observa a la fecha en los registros de la Secretaría General de Acuerdos I que se haya interpuesto algún medio de defensa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS I DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAESTRO JOACIM BARRIENTOS ZAMUDIO

JBZ/FCG







Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

2/05¹²

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1007/2024

JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-52103/2023

PARTE ACTORA:

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

AUTORIDAD DEMANDADA:

SUBPROCURADOR DE RECURSOS
ADMINISTRATIVOS Y AUTORIZACIONES DE LA
PROCURADURÍA FISCAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

PARTE APELANTE:

SUBPROCURADOR DE RECURSOS
ADMINISTRATIVOS Y AUTORIZACIONES DE LA
PROCURADURÍA FISCAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

MAGISTRADA PONENTE:

DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:

LICENCIADA ADRIANA GONZÁLEZ CARBAJAL.

Acuerdo del Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día DIECISIETE DE ABRIL
DE DOS MIL VEINTICUATRO. ~~~~~

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN NÚMERO RAJ.1007/2024
interpuesto el día nueve de enero de dos mil veinticuatro, en la Oficialía de
Partes Común de este Tribunal, por la Subprocuradora de lo Contencioso de
la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la
autoridad demandada en el presente juicio, en contra de la sentencia de
fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por la
Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, en el juicio de nulidad
número TJ/I-52103/2023.

RESULTANDO

TJ/I-52103/2023
PA-003046-2024



1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD Y ACTO IMPUGNADO. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** presentó demanda de nulidad, señalando como acto impugnado lo siguiente:

“La resolución de fecha 29 de mayo de 2023, contenida en el oficio número **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** emitida por el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones adscrita a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.”

(La parte actora impugna la resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, a través de la cual se resuelve la solicitud de prescripción de créditos fiscales por concepto de impuesto predial de los bimestres cuarto de dos mil trece al quinto de dos mil quince, respecto al inmueble ubicado en **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

En la resolución impugnada se resolvió que no era procedente declarar la prescripción de los créditos fiscales que refiere la actora, ya que la prescripción es un medio de extinción de la obligación de pago a cargo de la contribuyente, y que su término de cinco años comienza a correr desde que el pago pudo ser legalmente exigido de ahí que, para que inicie el plazo mencionado es necesario que exista previamente la determinación de un crédito y que el contribuyente no realice el pago, y dado que en el presente caso no existe un crédito fiscal determinado, con fundamento en el artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México, no es procedente declarar la prescripción que la actora solicitó.)



2. ADMISIÓN DE DEMANDA. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, la Magistrada Instructora de la Ponencia Tres de la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, admitió la demanda, así como las pruebas ofrecidas por el demandante y emplazó a la autoridad señalada como responsable para que produjera su contestación a la demanda; asimismo, se le requirió a la autoridad demandada para que con su oficio de contestación a la demanda exhibiera el expediente administrativo **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**

3. CONTESTACIÓN DE DEMANDA. A través del proveído de fecha ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad demandada dando contestación a la demanda, en la que se pronunció respecto del acto controvertido, planteando causales de improcedencia, defendiendo la





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

legalidad del acto impugnado, y se tuvieron por ofrecidas las pruebas que se relacionan en el oficio que se acuerdo; asimismo, mediante el mismo acuerdo se requirió a la autoridad demandada por segunda ocasión la exhibición del expediente administrativo DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

4. ACUERDO DE TRÁMITE. Mediante acuerdo de fecha once de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó un nuevo plazo para la exhibición de los actos requeridos en el acuerdo admisorio, por lo que se acordó requerir por última ocasión a la autoridad demandada para que exhiba el expediente administrativo DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

5. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por desahogado el requerimiento a cargo de la autoridad demandada señalado en el acuerdo admisorio de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés.

6. VISTA PARA ALEGATOS Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, la Magistrada Instructora emitió el proveído de alegatos y cierre de instrucción, mediante el cual otorgó un plazo de cinco días hábiles a las partes para que formularan alegatos por escrito, precisando que transcurrido dicho término con o sin alegatos quedaría cerrada la instrucción, siendo así, que las partes contendientes no presentaron alguna promoción mediante la cual ejercieran dicho derecho.

7. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la Sala de Primera Instancia dictó sentencia en la que determinó declarar la nulidad del acto impugnado. Dicha sentencia fue notificada a la autoridad demandada el siete de diciembre de dos mil veintitrés, y a la parte actora el veintidós de enero de dos mil veinticuatro, tal como consta en los autos del juicio de nulidad en que se actúa. Del fallo en comento, se desprenden los siguientes puntos resolutivos:

TJ/I-52103/2023
Instructora

PA-000046-2024

"PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente asunto de conformidad con lo expuesto en el punto considerativo I de este fallo.

SEGUNDO.- No se sobresee el presente juicio.

TERCERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, por lo que se declara la nulidad de la resolución impugnada en los términos y para los efectos precisados en el Considerando final de este fallo.

CUARTO.- En contra de la presente sentencia procede el recurso de apelación ante la Sala Superior de este Tribunal.

QUINTO.- Se hace del conocimiento de las partes lo dispuesto en el punto 5 de los "Lineamientos para la elaboración de los inventarios de expedientes susceptibles de eliminación e inventario de baja documental", aprobados por la Junta de Gobierno de este Tribunal en sesión de ocho de junio de dos mil diecisiete, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, que a letra dice: "Se les hace saber a las partes el derecho que les asiste para recoger los documentos personales que obren en el expediente en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de que se ordenó el archivo definitivo del asunto, apercibidos que de no hacerlo en el tiempo señalado, se le tendrá por renunciado a ello y podrán ser sujetos al proceso de depuración".

SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

(La Sala de Origen declaró la nulidad de la resolución impugnada ya que a su consideración en la especie sí existen catorce créditos fiscales por concepto del impuesto predial de acuerdo a la probanza consistente en la consulta de adeudos de impuesto predial correspondiente a la cuenta catastral número DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX de la que se advierte que sí existen créditos fiscales a cargo del actor.

De ahí que, sí existen créditos fiscales de los bimestres que van DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX se determinó que los mismos han prescrito ya que tomando en consideración el bimestre más actual, es decir el DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX, el cual pudo ser exigido desde DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX por lo que el termino legal de cinco años para que se configurara la prescripción empezó a correr a partir de DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX cumpliéndose los cinco años en el mes de de ahí que, si fue hasta el trece de julio de dos mil veintiuno cuando la parte actora solicito a la demandada la declaratoria de la prescripción, resulta evidente que se ha configurado a su favor dicha figura jurídica.

Derivado de lo anterior, se declaró la nulidad de la resolución impugnada quedando obligada la autoridad demandada a abstenerse de cobrar los créditos fiscales por concepto de impuesto predial, relativos a los bimestres solicitados y respecto del inmueble defendido.)

8. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. En desacuerdo con el fallo de primera instancia, con fecha nueve de enero de dos mil veinticuatro, la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



JUSTICIA
VADEL
MEXICO
VERA
S

México, en representación de la autoridad demandada en el presente juicio, interpuso recurso de apelación en contra de la referida sentencia, de conformidad y en términos de lo previsto en el artículo 116 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

9. ADMISIÓN Y RADICACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Por auto de fecha cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, se admitió y radicó el recurso de apelación por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de su Sala Superior, se designó como Magistrada Ponente a la **Doctora Mariana Moranchel Pocaterra** y se ordenó correr traslado a la parte actora con copia simple del mismo, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

10. RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE POR LA MAGISTRADA PONENTE. Con fecha cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, la Magistrada Ponente recibió los autos del juicio de nulidad y del recurso de apelación de que se trata.

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. Este Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver del recurso de apelación promovido, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 9, 15 fracción VII y 16 de la Ley Orgánica de este Tribunal, y los diversos 1, 116, 117 y 118 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete, vigentes a partir del dos de septiembre de dos mil diecisiete, de acuerdo a lo previsto en el artículo Primero Transitorio de las referidas Leyes.

II. EXISTENCIA DE LA SENTENCIA APELADA. La existencia de la sentencia apelada es cierta, según las constancias que integran los autos del expediente **TJ/I-52103/2023**.

III. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación **RAJ.1007/2024** fue interpuesto por la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la autoridad demandada en el presente juicio, el **nueve de enero de dos mil veinticuatro**, esto es dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 118 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; lo anterior en razón que, si la sentencia recurrida se le notificó el **siete de diciembre de dos mil veintitrés**, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, dicho término corrió del **once de diciembre de dos mil veintitrés al doce de enero de dos mil veinticuatro**, sin computar los días nueve y diez de diciembre de dos mil veintitrés, por haber sido días inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la precitada Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y Trinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, y los días uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete de enero de dos mil veinticuatro, por corresponder al segundo periodo vacacional de este Tribunal para el año dos mil veintitrés.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. El recurso de apelación **RAJ.1007/2024**, es **PROCEDENTE**, toda vez que fue interpuesto por parte legítima, en este caso por la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la autoridad demandada en el presente juicio; en contra de la sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, por la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, en los autos del juicio contencioso administrativo **TJ/I-52103/2023**, acto en contra del cual sí procede el aludido medio de defensa, en términos de lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

V. AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN. En el recurso de apelación número **RAJ.1007/2024** la parte inconforme señala que la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

contencioso administrativo número **TJ/I-52103/2023**, le causa agravio tal y como se desprende de los argumentos planteados en el oficio que corre agregado en el expediente del citado recurso, los cuales serán analizados posteriormente sin que sea necesario transcribirlo, en razón de que no es esencial para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número S.S.17, perteneciente a la Cuarta Época, emitida por la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en sesión extraordinaria de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco de marzo de dos mil quince, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES A LOS RECURSOS DE APELACIÓN ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los artículos que integran el Capítulo XI del Título Segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, denominado 'De las Sentencias', y en particular el diverso 126 se advierte que las sentencias que emitan las Salas no necesitan formulismo alguno, razón por la cual se hace innecesaria la transcripción de los agravios hechos valer por el apelante, sin embargo, tal situación no exime de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad debiendo para ello hacer una fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, señalando los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitar a los puntos cuestionados y a la solución de la Litis planteada en acato al dispositivo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

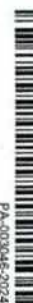
VI. RAZONAMIENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Este Pleno Jurisdiccional considera importante precisar que la Sala de Origen declaró la nulidad de la resolución impugnada ya que a su consideración en la especie sí existen catorce créditos fiscales por concepto del impuesto predial de acuerdo a la probanza consistente en la consulta de adeudos por impuesto predial correspondiente a la cuenta catastral número

DATO PERSONAL ART. 186 I

de la que se advierte que sí existen créditos fiscales a cargo del actor.

DATO PERSONAL ART. 186 LT7

TJ/I-52103/2023
RAJ.1007/2024



De ahí que, sí existen créditos fiscales de los bimestres que van DATO PERSONAL ART.186 I
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX, se determinó que los mismos
han prescrito ya que tomando en consideración el bimestre más actual, es
decir **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** el cual pudo ser exigido desde
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX por lo que el termino legal de cinco años para
que se configurara la prescripción empezó a correr a partir de DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCC
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**
cumpliéndose los cinco años en el mes de

DATO PERSONAL ART.186 LTA de ahí que, si fue hasta el trece de julio de dos mil veintiuno
cuando la parte actora solicito a la demandada la declaratoria de la
prescripción, resulta evidente que se ha configurado a su favor dicha figura
jurídica.

Derivado de lo anterior, se declaró la nulidad de la resolución impugnada
quedando obligada la autoridad demandada a abstenerse de cobrar los
créditos fiscales por concepto de impuesto predial, relativos a los bimestres
solicitados respecto del inmueble defendido.

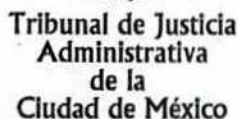
Lo anterior, se advierte de la lectura de la parte conducente de la sentencia
sujeta a revisión, misma que se transcribe a continuación:

IV.- Ahora bien, esta Sala analizando los argumentos vertidos por las partes
que hicieron valer tanto en su escrito inicial de demanda como en su oficio
de contestación a la misma y habiendo hecho el estudio y valoración de las
pruebas admitidas a las partes, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículos 100 fracción I y 101 de la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, esta Juzgadora estima fundado el
"ÚNICO" concepto de nulidad que hace valer la actora en su demanda, en
dónde aduce que el acto impugnado deviene en ilegal al negar que en la
especie prescribió el crédito fiscal cuya declaratoria de prescripción solicitó.

Por su parte, la autoridad fiscal demandada adujo que no declaró la
prescripción solicitada en atención a que en la especie no existe el crédito
fiscal cuya declaración de prescripción solicitó el actor, por lo que debe
reconocerse la validez del acto impugnado.

Por cuestión de método, esta Sala primeramente procede a analizar sobre
la existencia del crédito fiscal que aduce la impetrante ha prescrito y la
enjuiciada insiste en que no existe.

Esta Juzgadora advierte que a fojas cincuenta y cinco de autos corre
agregada la copia certificada de la consulta de adeudos por concepto de
impuesto predial correspondientes a la cuenta catastral número DATO PERSONAL ART.186

**DATO PERSONAL ART.18**

Así es, del análisis a la referida probanza **que la propia autoridad demandada trajo a juicio** se advierte que por lo que hace a los bimestres que van del _____ respecto del inmueble que defiende la

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

que van del _____, respecto del inmueble que defiende la
actora ubicado en **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX.

DATO PERSONALE

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPR

se han determinado sendos créditos fiscales por cada uno de los mencionados bimestres, veamos la foja cincuenta y cinco de autos:

 Continue

2 Períodos Vencidos

Cucina Predia DATO PERSONAL ART.186 L.1

Selecione un período que cese de liquidar.

<input type="checkbox"/>	Periodo	Requerido	Impuesto Entido	Impuesto Pagado	Saldo
--------------------------	---------	-----------	-----------------	-----------------	-------

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

JUSTITIA DE
MEXICO
G.
V.

De la anterior digitalización al elemento probatorio que la propia autoridad fiscal enjuiciada trajo a juico, se logra advertir que en efecto, tal y como lo hizo valer la parte actora en el concepto de nulidad sujeto a estudio, en la especie existen catorce créditos fiscales por concepto de impuesto predial, relativos a los bimestres que van del DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX **respecto del** inmueble propiedad de la actora ubicado en DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

cuenta catastral es la número

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

Con lo anterior, se desvirtúa plenamente la negativa de la autoridad demandada en el sentido que no es posible declarar la prescripción de un crédito fiscal inexistente ya que se ha demostrado que en la especie si existen los mismos.

Ahora bien, una vez que se ha demostrado la existencia de catorce créditos fiscales relativos al tributo en comento y a los bimestres ya indicados, se procede a estudiar si estos han prescrito.

Al respecto el artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México, textualmente señala:

"ARTÍCULO 50. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos.

El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito.

Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que la misma sea notificada al deudor en términos de lo dispuesto en este Código.

Ahora bien, tomando en consideración el bimestre más actual (respecto del cual la actora aduce ha operado la prescripción del crédito fiscal correspondiente), que en el caso según lo expuesto en la solicitud del accionante resulta ser el **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**, el artículo 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en ese momento establece:

"ARTICULO 131.- El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante declaración ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría o auxiliares autorizados."

Del precepto jurídico antes citado se aprecia que el pago correspondiente al impuesto predial debe realizarse por periodos bimestrales, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, por lo que en el caso en concreto, la hipótesis normativa que es aplicable para el cómputo de la prescripción de créditos fiscales a cargo de la parte actora en materia de impuesto predial por los bimestres que van del **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** es la establecida en el anteriormente referido artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Es decir, la extinción de créditos fiscales se configura por prescripción en el término de cinco años, comenzando a computarse dicho término a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido siempre y cuando no haya sido interrumpido con alguna gestión de cobro.

Es importante destacar que del minucioso análisis a los presentes autos no se advierte que exista elemento probatorio alguno del que se desprenda que existe gestión de cobro alguna respecto de los créditos fiscales que nos ocupan, ni tampoco la autoridad fiscal demandada hizo mención que pretendió hacerlos efectivos al contestar la instancia, por lo que esta Sala concluye que no se ha interrumpido el término legal de cinco años que nos ocupa.

En atención a lo anterior y tomado en consideración que desde diciembre del año dos mil quince pudo haber sido exigido el pago del crédito fiscal más reciente, (de los diversos que solicita la actora sean declarados



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS

prescritos), por ende tenemos que el referido término legal de cinco años para que se configurara la figura jurídica de la prescripción comenzó a correr a partir de diciembre del año dos mil quince, cumpliéndose los cinco años para ello en el mes de diciembre de dos mil veinte.

Es por lo anterior que a juicio de esta Sala para el día trece de julio de dos mil veintiuno, que es la fecha en que la parte actora solicitó por escrito a la demandada se declarara la prescripción de los créditos fiscales que nos ocupan, efectivamente se había configurado su favor tal figura jurídica, por lo que los créditos en comento, se encuentran extintos.

Es por ello que la resolución impugnada sea ilegal ya que tal y como quedó demostrado en párrafos anteriores, los créditos fiscales por concepto de impuesto predial materia de este fallo han prescrito.

En este contexto, si de los autos no se advierte que la autoridad demandada hubiere ejercitado sus facultades de cobro durante el anteriormente referido lapso de tiempo, implica que no hubo suspensión del término a que refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México, entonces resulta inconcuso que el crédito fiscal referido **ha prescrito**, en la inteligencia de que si dicha figura jurídica se actualiza respecto al bimestre más reciente (quinto de dos mil quince), por consecuencia, se actualiza también la prescripción respecto a los bimestres más antiguos.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 31 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 97, 98, 100 fracción III, 102 fracciones II y VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se declara la nulidad de la resolución impugnada, quedando obligada la autoridad fiscal enjuiciada a restituir a la parte actora en el goce de sus derechos indebidamente afectados, que en la especie se hace consistir en abstenerse de cobrar los créditos fiscales por concepto de impuesto predial, relativos a los bimestres que van del DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX respecto del inmueble propiedad de la actora ubicado en DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX cuya cuenta catastral es la número DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

Concediéndose a la demandada un término de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que quede firme este fallo para que lo cumplimente en los términos en que fue resuelto.

VII. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN. Expuestos los fundamentos y motivos en los que se apoyó la sentencia apelada, este Pleno Jurisdiccional procede al análisis del **único agravio** expresado por la autoridad demandada, hoy recurrente en el recurso de apelación **RAJ.1007/2024**, en donde medularmente refiere que *lo resuelto por la Sala Ordinario es ilegal ya que la autoridad se encuentra imposibilitada para otorgar la prescripción solicitada por el contribuyente, toda vez que no existe un crédito fiscal determinado, pues la actora no adjuntó ningún medio de*

prueba que genere la convicción sobre la existencia de alguna determinante de crédito fiscal, pues únicamente anexó una captura de pantalla de la página de la Oficialía Virtual de Catastro (OVICA), en la que constan sus adeudos, sin embargo, no constituyen créditos fiscales que hubiesen sido determinados con motivo del ejercicio de facultades de comprobación.

Asimismo, la Sala pierde de vista que la supuesta determinación de créditos fiscales son en realidad adeudos que aparecen registrados en la Oficina Virtual de Catastro, no obstante, en razón de que tales créditos fiscales son inexistentes la accionante fue omisa en ofrecer prueba alguna que genere plena certeza de la existencia de algún crédito, pues dicho sistema electrónico sirve únicamente para consultar servicios y adeudos, por lo que resulta inconcuso que los datos contenidos en él no constituyen la última voluntad de la autoridad ni actos definitivos emitidos por la autoridad, además de que en autos no se advierte que la accionante haya dado el debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales.

Al respecto, a consideración de este Pleno Jurisdiccional el agravio en análisis resulta **fundado** para revocar la sentencia apelada, por las consideraciones jurídicas que a continuación se expresan:

En primer lugar, tenemos que tener claro el contenido del artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el cual establece lo que sigue:

ARTÍCULO 50.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que la misma sea notificada al deudor en términos de lo dispuesto en este Código.

Del precepto legal citado se desprende que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, y que el término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

D



DE JUS
TRATIVA DE
DE MÉXICO
RÍA GEN
CUERDO

En ese sentido, dicho numeral al hablar de pago se entiende que previamente fue determinado un crédito fiscal en contra del contribuyente, por lo que no puede sostenerse válidamente que el citado numeral se refiera a la extinción de las facultades fiscalizadoras de la autoridad demandada, pues a fin de que se estime actualizada la prescripción, el inicio del plazo de cinco años a que se refiere el artículo comentado es necesario que exista previamente la determinación de un crédito fiscal y que el contribuyente no realice el pago correspondiente o garantice su monto, pues de otra manera no se entendería que el Código Fiscal de la Ciudad de México distinguiera entre caducidad y prescripción, y que el artículo citado hablara de crédito fiscal así como que el término para su prescripción, inicia a partir de la fecha en que el pago puede ser legalmente exigido.

Asimismo, en el caso de que se interponga algún medio de defensa en contra de la determinación del crédito por parte de fisco será hasta el momento en que se notifique al contribuyente la resolución que conformó esa determinación, cuando inicie el término de la prescripción pues es hasta ese momento en que puede ser legalmente exigido.

Sirve a lo anterior, la Tesis Aislada VI.3o.A.102 A de la Novena Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en la Gaceta Oficial del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de dos mil dos, con número de registro digital 185347, que a la letra indica lo que sigue:

PRESCRIPCIÓN. PARA QUE PUEDA COMENZAR SU CÓMPUTO, ES NECESARIA LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO. El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación contiene una norma de carácter sustantivo, en tanto contempla la extinción de los créditos fiscales por el transcurso del tiempo (cinco años). A esa extinción la denomina expresamente como prescripción. Así, el mencionado numeral está ubicado en el capítulo III, llamado "Del procedimiento administrativo de ejecución" e instituye que el término para que se actualice la figura de la prescripción inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Al hablarse de pago, se entiende que previamente fue determinado un crédito, por lo que no puede sostenerse, válidamente, que el citado numeral se refiera a la extinción de las facultades del fisco. Para que inicie el plazo de cinco años a que se refiere el artículo 146 que se comenta, y a fin de que pueda estimarse actualizada la prescripción, es necesario que exista previamente la determinación de un crédito y que el contribuyente no realice el pago

correspondiente o garantice su monto dentro del plazo previsto en la legislación tributaria federal, pues de otra manera no se entendería que el Código Fiscal de la Federación distinguiera entre caducidad y prescripción, y que el citado artículo 146 hablara de "crédito fiscal", así como que el término para su "prescripción" inicia a partir de la fecha en que el "pago" pudo ser legalmente exigido. Luego, en el caso de que se interponga algún medio de defensa en contra de la determinación del crédito por parte del fisco, será hasta el momento en que se notifique al contribuyente la resolución que confirmó esa determinación, cuando inicie el término de la prescripción, pues es hasta este momento cuando el pago puede ser legalmente exigido.

Ahora bien, en el caso particular la Sala de Primera Instancia determinó que en el presente caso la parte actora si había demostrado la existencia de catorce créditos fiscales ya que en autos se advertía la documental consistente en la consulta realizada a la Oficina Virtual de Catastro (OVICA), de la que se desprendían dichos créditos fiscales por concepto de impuesto predial, relativos a los bimestres que van del cuarto de dos mil trece al quinto de dos mil quince, respecto del inmueble propiedad de la actora ubicado en

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

documental se digitaliza a continuación en su parte medular.

Consente

Períodos Vencidos

Cuenta Predial

Seleccione los periodos que desea liquidar.

Período	Requerido	Impuesto Emitido	Impuesto Pagado	Saldo
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX				



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



LDE
TRATIVA
DDE MÉXICO
ARÍA GENE
ACUERDO

No obstante, contrario a lo que determinó la Sala de Origen y tal como lo argumenta la parte apelante, dicha documental no debe considerarse como determinante de crédito fiscal, pues de conformidad a lo que establece el artículo 13 del Código Fiscal de la Ciudad de México, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir la Ciudad de México o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos, de sus accesorios, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y demás que la Ciudad de México tenga derecho a percibir por cuenta ajena, y las contraprestaciones por los servicios que presta la Ciudad de México en sus funciones de derecho privado por el uso, aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Así, la documental citada no tiene el carácter de crédito fiscal determinado por la autoridad demandada en el que se le hubiere dado a conocer, en su caso, las contribuciones omitidas actualizadas, los recargos y las multas que correspondieran; sino que, dicha documental únicamente consiste en una consulta de adeudos que no implican una resolución definitiva ni la última voluntad de la autoridad demandada para exigir el pago de los adeudos no saldados por el contribuyente.

En ese sentido, y dado que la consulta de adeudos no hace las veces de una determinante de crédito fiscal, el plazo de prescripción no ha iniciado, pues como se ha estudiado previamente, para que dicha figura jurídica inicie su plazo de cinco años resulta indispensable que la autoridad fiscal determine un crédito fiscal en contra del hoy actor, lo que la autoridad demandada en el presente caso negó desde su contestación a la demanda y que la actora no logró acreditar durante la instrucción del presente juicio.

Así las cosas, a consideración de este Pleno Jurisdiccional, resulta evidente que la Sala de Origen no emitió un pronunciamiento congruente y exhaustivo, pues omitió analizar los argumentos vertidos por la autoridad demandada referentes a que no se actualiza la prescripción a favor del actor,



pues en el presente caso no existe un crédito fiscal, circunstancia que genera que la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, haya emitido una determinación que **no es congruente y exhaustiva**.

Circunstancia anterior que deviene en una falta de estudio por la Sala de primera instancia y, por ende, el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 98 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, precepto legal que establece lo siguiente:

Artículo 98. Las sentencias no necesitan formulismo alguno, pero deberán contener:

- I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, según el prudente arbitrio de la Sala. Las documentales públicas e inspección judicial, siempre harán prueba plena en los términos de esta Ley;
- II. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos a los puntos cuestionados y a la solución de la litis planteada;
- III. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o cuya nulidad se declare; y
- IV. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme.

(Énfasis añadido)

De lo que se colige que, si bien las sentencias no necesitan un formulismo específico para su emisión, es indispensable que cuando mínimo se fijen con claridad los puntos litigiosos sobre los cuales versa la controversia y que en consecuencia se lleve a cabo un análisis exhaustivo de estas cuestiones, lo que no sucedió tratándose de la sentencia recurrida.

En este sentido, se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado de cualquier fallo: el de congruencia y el de exhaustividad.

Así, el principio de congruencia está referido a que la sentencia debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis, tal como haya





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el fallo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el fallo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio de nulidad.

Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se declare la nulidad del acto impugnado o se reconozca su validez, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.

En síntesis, los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de nulidad, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los accionantes.

De este modo, del estudio practicado a la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por Primera Sala Ordinaria de este Tribunal, en el juicio de nulidad **TJ/I-52103/2023**, se observa que, esta **NO cumplimenta los principios de exhaustividad y congruencia** que deben regir en toda resolución jurisdiccional, pues, la Juzgadora de origen, dictó sentencia, sin analizar los argumentos vertidos por la autoridad demandada

JUSTICIA
DE LA
CIUDAD DE
MÉXICO

referentes a que no se actualiza la prescripción a favor del actor, pues en el presente caso no existe un crédito fiscal.

Es aplicable a lo anterior el contenido de la jurisprudencia número 1a./J. 33/2005, que aparece publicada en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en abril de dos mil cinco, Tomo XXI, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenida por su Primera Sala, con número de registro 178783, correspondiente a la Novena Época, contenido que se reproduce a continuación:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutive, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.

Consecuentemente, el fallo apelado incumple con los principios de congruencia y exhaustividad, y transgrede lo señalado en el artículo 98 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al no haberse pronunciado conforme a los planteamientos alegados por las partes; por lo que al resultar fundado el **único** agravio formulado en el recurso **RAJ.1007/2024**, es procedente **revocar** la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, en el juicio de nulidad **TJ/I-52103/2023**.

VIII. EL PLENO JURISDICCIONAL REASUME LA JURISDICCIÓN. En las relatadas condiciones, reasumiendo jurisdicción en sustitución de la Sala de primera instancia, procede a emitir una nueva sentencia definitiva.

Sirve de apoyo a lo anterior el contenido de la jurisprudencia con número de tesis **XI.2o.J/29**, que aparece publicada en el Apéndice de dos mil cinco,



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



JUSTICIA
IVADEL
MÉXICO
CENTRAL
106

Tomo XXII, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 177094, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se reproduce a continuación:

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios.

Este Pleno Jurisdiccional considera pertinente destacar que, dentro de los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del capítulo de **RESULTANDOS** de la presente resolución, se realizó la relatoría de los antecedentes del presente juicio, por lo que los mismos se tienen por insertos en el presente apartado, en aras de economía procesal y a efecto de evitar ociosas repeticiones; por lo que se procede al análisis de las causales de improcedencia y consecuente sobreseimiento.

IX. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, este Pleno Jurisdiccional procede al análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, con fundamento en los artículos 92 y 93 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Ahora bien, del análisis realizado al oficio de contestación de demanda, no se desprende que la autoridad enjuiciada hubiese argumentado la actualización de alguna causal de improcedencia y sobreseimiento, y en virtud de que este Pleno Jurisdiccional no advierte la existencia de alguna



otra causal que deba ser analizada de oficio, se procede al estudio de fondo de la litis planteada.

X. FIJACIÓN DE LA LITIS. La litis en el presente juicio consiste en determinar la legalidad o ilegalidad del acto impugnado consistente en la resolución administrativa de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente fiscal ^{DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX} por el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Ciudad de México, lo que traerá como consecuencia que se reconozca su validez o se declare su nulidad.

XI. ESTUDIOS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. Expuesto lo anterior, este Pleno Jurisdiccional procede al análisis del **único concepto de nulidad** hecho valer por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en donde medularmente argumenta que *el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, el cual se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, por lo que el argumento aducido por la autoridad demandada en el acto impugnado es erróneo e insuficiente para negar la declaratoria de prescripción solicitada ya que acreditó ser propietario del inmueble, y aportó el listado obtenido de la página de internet <https://ovica.finanzas.cdmx/adeudos>, en la que aparecen los créditos fiscales por los bimestres que van* ^{DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX}, ^{DATO PERSONAL ART.186 LTA} *que comprende la omisión del pago, actualización, recargos y multa, y dado que está obligado a autodeterminar y pagar impuesto predial a más tardar el último día del bimestre que corresponda, entonces, para los bimestres respecto de los cuales solicita su prescripción, ya se había excedido los cinco años que señala el artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México.*

Asimismo, refiere que *la demandada aplica incorrectamente el artículo 50 de Código Fiscal de la Ciudad de México, al argumentar que la captura de pantalla del listado de adeudos no genera convicción de la existencia de los créditos fiscales que hubieren sido determinados con motivo de ejercicio de*



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

facultades de comprobación, lo cual es ilegal, ya que se ignora la existencia de los artículos 126 y 127 del Código Fiscal para el Distrito Federal, de los que se desprende que al finalizar el bimestre respectivo, el impuesto es exigible por la autoridad fiscal y por lo tanto, comienza a correr el termino para efectos de la prescripción.

En ese mismo tenor, refiere que la autoridad demandada aplica incorrectamente el artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México, pues en este precepto se establece que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, el cual se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido así como los supuestos en que se interrumpe o se suspende la prescripción, sin embargo no prevé que el ejercicio de facultades de comprobación den origen al crédito fiscal como pretende interpretarlo la autoridad demandada, además de que se pasa por alto que el impuesto predial es auto determinable y que debe ser pagado durante el bimestre de que se trate, por lo que al día siguiente de finalizado cada bimestre, el crédito correspondiente es exigible, y por lo tanto inicia el periodo de cinco años para su prescripción.

Al respecto, en su oficio de contestación a la demanda, la autoridad enjuiciada argumentó que el argumento de la parte actora es infundado ya que la prescripción es definida como la extinción de la obligación de pago mediante el transcurso del tiempo y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley, la cual se encuentra contemplada en el artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el cual establece que la prescripción opera cinco años después de que el pago pudo ser legalmente exigido, esto es, a partir del día siguiente en que no fueron cubiertos o garantizados los créditos fiscales y en los plazos que señalan las propias leyes fiscales, no obstante, que para que dicho plazo de cinco años inicie es necesario que exista previamente la determinación de crédito y que el contribuyente no realice el pago correspondiente o garantice el mismo dentro del plazo previsto en la legislación, lo cual no aconteció en el presente caso, y por lo tanto, no es procedente el otorgamiento de la prescripción solicitada por el accionante.

DO
JEFES
LATIVA DEL
MEXICO
AGENER
ERDOS

Tomando en consideración las manifestaciones hechas por las partes, a juicio de este Pleno Jurisdiccional el único concepto de nulidad expuesto por la parte actora en su escrito inicial de demanda es fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, por las consideraciones de derecho que a continuación se exponen:

En primer lugar conviene precisar que, si bien la parte actora pretende la declaratoria de prescripción con relación a los adeudos del impuesto predial correspondiente a los bimestres que van del cuarto de dos mil trece al quinto de dos mil quince, respecto del inmueble ubicado en

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX respecto a la cuenta

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

predial que tributa con el número sin embargo en el presente asunto **no puede operar la “prescripción”** que se requiere, en virtud de que **no existe un crédito fiscal determinado que se le haya hecho del conocimiento, para que a partir de ese momento, empezara a computarse el término de los cinco años que señala el artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México.**

En este sentido resulta pertinente señalar lo que se debe entender por “prescripción” y “caducidad”, en virtud de que el Código Fiscal de la Ciudad de México tiene establecidas las hipótesis que se deben generar para su respectiva configuración.

En efecto, el artículo 50 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce establece que para que pueda iniciar el término para la configuración de la **prescripción** debe existir una determinante de crédito, como se desprende que la transcripción que se realiza a continuación:

ARTÍCULO 50.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de este



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que la misma sea notificada al deudor en términos de lo dispuesto en este Código.

En términos del precepto legal citado, **es necesario que exista resolución firme, debidamente notificada, que determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente**, para que a partir de ese momento se haga exigible para la autoridad respectiva.

Pero no puede sostenerse válidamente que cuando el contribuyente no presenta su declaración estando obligado a ello, el término para la "prescripción" empieza a correr al día siguiente en que concluyó el plazo para presentarla, pretendiendo que desde entonces resulta exigible por la autoridad el crédito fiscal, **ya que en tal supuesto lo que opera es la caducidad.**

Es aplicable a lo anterior el contenido de la jurisprudencia número 2a./J. 15/2000, que aparece publicada en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en febrero del año dos mil, Tomo XI, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenida por su Segunda Sala, con número de registro 192358, correspondiente a la Novena Época, contenido que se reproduce a continuación.

PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE EXIGIBLE. Conforme al mencionado artículo 146, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. **Ese término inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido.** Por ello, para que pueda iniciar el término de la prescripción, es necesario que exista **resolución firme, debidamente notificada, que determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente**, y no puede sostenerse válidamente que cuando el contribuyente no presenta su declaración estando obligado a ello, el término para la "prescripción" empieza a correr al día siguiente en que concluyó el plazo para presentarla, pretendiendo que desde entonces resulta exigible por la autoridad el crédito fiscal, ya que en tal supuesto lo que opera es la caducidad de las facultades que tiene el fisco para determinar el crédito y la multa correspondiente. De otra manera no se entendería que el mencionado ordenamiento legal distinguiera entre caducidad y prescripción y que el citado artículo 146 aludiera al crédito fiscal y al pago que pueda ser legalmente exigido.

DOSS MEXICO
JUSTICE
TVA DE LA
MEXICO
ENERAL
DOS

(Énfasis añadido)

Mientras que la “**caducidad**”, particularmente en la materia fiscal, constituye una forma de extinción de las facultades de la autoridad, que ocurre en el transcurso del tiempo; la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la contradicción de tesis 25/2001, estableció que es una institución de carácter procesal creada por el derecho tributario para sancionar a las autoridades hacendarias por falta del ejercicio oportuno de sus facultades de inspección, comprobación, **determinación** y sanción conferidas por la legislación, **respecto de las obligaciones fiscales a cargo de los habitantes de la República** y que, además, en materia tributaria es una institución cuya finalidad consiste en dar seguridad jurídica a los contribuyentes, ya que por virtud de ella no basta que la autoridad fiscal esté facultada legalmente para realizar determinados actos, sino que, además, es necesario que el ejercicio de tales facultades se realice dentro de un determinado plazo a efecto de que el gobernado tenga la seguridad de que una facultad de la autoridad no ejercitada oportunamente es una facultad extinta.

Destacando que, a diferencia de la prescripción que es una forma de extinción del crédito y, por ello, de naturaleza sustantiva, **la caducidad es una figura de carácter adjetivo o procesal, en tanto que va referida al ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales** y, éstas son la de **determinación y liquidación de créditos fiscales** y la **sancionadora**; por consiguiente, **puede decirse que la caducidad es una institución en virtud de la cual se extinguen las facultades de las autoridades fiscales para determinar y liquidar créditos fiscales, así como para sancionar las omisiones de los contribuyentes, por no ejercitarse dentro de los plazos que establece el ordenamiento jurídico en análisis**, en el caso, el artículo 99 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

En ese sentido, dicha figura se encuentra íntimamente relacionada con el elemento de la contribución, consistente en la época de pago, pues es a partir de la omisión del particular en cumplir con su obligación fiscal dentro



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
JEFATURA GENERAL DE
FISCALÍA

del plazo que marca la normativa fiscal de la Ciudad de México, cuando la autoridad puede iniciar el ejercicio de sus facultades para determinar la contribución omitida y sus accesorios, **de ahí que para determinar la legislación aplicable debe atenderse al momento en que se generó el hecho, dado que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran**, por lo que, tratándose de la exigibilidad del pago de dichas contribuciones, el análisis de la caducidad debe atender a las disposiciones que se encontraban vigentes al momento en que la autoridad estuvo en posibilidad de iniciar sus facultades de fiscalización.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio aislado II. T. Aux. 9 A, Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1538 y registro 166728, aplicado por analogía, cuya voz y texto son los siguientes:

"CADUCIDAD DE LAS FACULTADES PARA DETERMINAR CONTRIBUCIONES OMITIDAS Y SUS ACCESORIOS. TRATÁNDOSE DE LA EXIGIBILIDAD DE FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, SI LA AUTORIDAD ESTUVO EN POSIBILIDAD DE EMITIR EL ACTA DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN MIENTRAS RIGIÓ LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, NO PUEDE ESTUDIARSE AQUELLA FIGURA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA LUZ DE DICHA PORCIÓN NORMATIVA, AL HABERSE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. La caducidad es una cuestión de carácter sustantivo al estar relacionada con la extinción de las facultades de la autoridad para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, por lo que se traduce en un derecho del particular a que, una vez que se han reunido los requisitos establecidos por la ley, la autoridad no esté en aptitud de emitir una liquidación de aquéllas, ni de iniciar, por consiguiente, sus facultades coactivas de cobro. Por ello, tomando en cuenta el contenido del artículo 6°. del Código Fiscal de la Federación que establece que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, se obtiene que tratándose de la exigibilidad de fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar el interés fiscal, el análisis de la caducidad debe atender a las disposiciones que se encontraban vigentes al momento en que la autoridad pudo emitir el acta de incumplimiento de la obligación a que se refiere la fracción IV del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, si la autoridad estuvo en posibilidad de emitir dicha acta mientras rigió la señalada fracción IV, vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, no puede estudiarse aquella figura en el juicio contencioso administrativo a la luz de dicha porción normativa, al haberse declarado inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, según se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 25/2001, visible en la página 53 del Tomo XIII, junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dispone: "CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". Lo anterior, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo."

En consecuencia, se tiene que el legislador de la Ciudad de México estableció la figura de la caducidad tomando en cuenta que la facultad conferida a la autoridad no puede ser indefinida, sino que debe estar acotada a un tiempo prudente a fin de cumplir con los principios de seguridad y certeza jurídica, evitando la actuación arbitraria de la autoridad; por lo tanto al no haber iniciado de forma alguna sus facultades de fiscalización dentro del tiempo que marca la Ley, resulta evidente que no puede aplicarse una norma de procedimiento vigente en el momento en que se solicita la configuración de la caducidad de las facultades de la autoridad, pues ello es en detrimento de los derechos del actor y de su garantía de seguridad y certeza jurídica.

Convinando resaltar que si la caducidad es una sanción a la inactividad de la autoridad fiscal, no sería lógico ni jurídico que se aplicara una norma vigente en el momento en que el contribuyente solicita la configuración de dicha institución jurídica, pues ello implicaría que se reconozca de manera tácita que la autoridad actuó conforme lo dispone la Ley, es decir, dentro de los plazos que marca el Código Tributario local, lo cual es totalmente ilegal, pues precisamente se trata de la institución que surge por la omisión de la autoridad para ejercer sus facultades de determinación.

Una vez explicado lo anterior, y **supliendo las deficiencias de la demanda**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, este Pleno Jurisdiccional considera procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés; **lo anterior, derivado de que las Salas de este Tribunal están facultadas para suplir la deficiencia de la demanda y analizar si se actualiza la figura de la prescripción o caducidad,**

ESTADOS
TR.
ADM.
CI.
SP.



con la única salvedad de no cambiar o alterar los hechos o alegaciones expresados por los contendientes. Lo anterior aplicando de manera análoga lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 159/2007, con registro digital 171672, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 565, de texto y rubro siguiente:

PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DETERMINAR CUÁL DE ESAS FIGURAS SE ACTUALIZA, CONFORME A LAS ALEGACIONES EXPUESTAS EN LA DEMANDA Y EN LA CONTESTACIÓN. Las acciones y las excepciones proceden en el juicio aun cuando no se precise su nombre o se les denomine incorrectamente. Por otro lado, conforme al tercer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, coincidente con el mismo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. En tal virtud, cuando en una demanda de nulidad en vía de acción o de excepción se reclame la configuración de la prescripción o de la caducidad, corresponderá a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analizar cuál de esas figuras se actualiza, atendiendo a los hechos contenidos en el escrito de demanda o en la contestación, con la única salvedad de no cambiar o alterar los hechos o alegaciones expresados por los contendientes.

En ese sentido, en el presente caso se actualiza la caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal respecto del pago del impuesto predial de los bimestres que van del cuarto de dos mil trece al quinto de dos mil quince relativos al inmueble ubicado en

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX respecto a la cuenta predial que tributa con el número conforme a lo que a continuación se expone.

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

Se dice lo anterior, pues por lo que hace a los bimestres cuarto y quinto de dos mil trece, la figura de la caducidad se debe analizar con apego al artículo



99 del Código Fiscal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) vigente en el dos mil trece, en el que se establece lo siguiente:

Artículo 99. Las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales derivados de contribuciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones de este Código, así como determinar responsabilidades resarcitorias, se extinguirán en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que:

I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante, lo anterior cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que se presenten, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio;

II. Se presentó o debió haberse presentado declaración que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración;

III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente;

IV. Se hubiere cometido la conducta que causa el daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de las entidades, y

V. Se presentó el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por un Contador Público registrado, siempre que éste no dé origen a la presentación de declaraciones complementarias por dictamen, toda vez que en caso contrario se estará a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo.

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años cuando el contribuyente omita realizar alguno de los siguientes actos:

a) Inscribirse ante la autoridad fiscal en los padrones que le corresponda o no presente los avisos que modifiquen los datos registrados en éstos.

b) Presentar declaraciones en los términos que disponga este Código.

En este caso, el plazo será de cinco años si el contribuyente presenta en forma espontánea y sin que haya sido requerida la declaración omitida. No podrá ser sumado el tiempo transcurrido desde la fecha en la que debió ser presentada con el que trascurra posterior a su presentación.

El plazo señalado en este artículo no estará sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación o se notifique el requerimiento de obligaciones omitidas por las autoridades fiscales; o cuando se inicien procedimientos de responsabilidad



TRM
ADMINIST
CIUDAD DE
SECRETARÍA





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



SECRETARÍA
DE ECONOMÍA
FISCALÍA
GENERAL

resarcitoria; se interponga algún recurso administrativo o juicio; cuando las autoridades no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En los dos últimos casos se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en que se localice al contribuyente.

El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación o la notificación del requerimiento de obligaciones omitidas y la instauración de procedimientos resarcitorios, inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal. Para el caso del ejercicio de las facultades de comprobación o la notificación del requerimiento de obligaciones omitidas, la suspensión a que se refiere este párrafo estará condicionada a que dentro de los doce meses siguientes al inicio de las facultades de comprobación o la notificación del requerimiento de obligaciones omitidas, se levante acta final, se emita oficio de observaciones o se dicte la resolución definitiva, a efecto de que opere la suspensión. Asimismo, para el caso de la instauración del procedimiento resarcitorio dicha suspensión estará condicionada a que dentro de los plazos establecidos por el artículo 458 de este Código, se dicte la resolución que corresponda en el procedimiento resarcitorio. De no cumplirse estas condiciones se entenderá que no hubo suspensión.

No será necesario el levantamiento de las actas a que se refiere el párrafo anterior, cuando iniciadas las facultades de comprobación se verifiquen los supuestos señalados en los incisos a) y b) de la fracción X del artículo 90 de este Código.

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.

Así también, el artículo 131 primer párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), regula lo siguiente:

ARTICULO 131.- El pago del **impuesto predial** deberá hacerse en forma **bimestral**, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante declaración ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría o auxiliares autorizados.

(...)

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II y 172 del Código ya citado, **sí se configura a favor del accionante la figura jurídica de la caducidad** de las facultades de la enjuiciada para la determinación del pago del impuesto predial de los bimestres cuarto y quinto de dos mil trece, correspondiente al inmueble ubicado en

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL

TJ/I-52103/2023
NÚMERO



PA-003046-2024

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

respecto a la cuenta predial que tributa con el número

ello en razón de que, tomando en consideración el bimestre

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

el término de cinco años a que alude el precepto jurídico citado, corrió desde el momento en que era exigible su pago, es decir, de conformidad con el artículo 131 primer párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal transcrito con antelación, desde

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

En este contexto, si del análisis exhaustivo de la totalidad de las constancias que conforman el juicio de nulidad que en este acto se resuelve, no se advierte que la autoridad demandada hubiere ejercitado sus facultades de comprobación, lo que implica que no hubo suspensión del término a que refiere el artículo 99 del Código Fiscal del Distrito Federal, entonces resulta inconcuso que las facultades de la autoridad demandada para la determinación de algún crédito fiscal en materia de impuesto predial correspondiente al predio y bimestres mencionados **ya caducaron**.

Asimismo, **por lo que hace a los bimestres que van del segundo al quinto de dos mil quince, también opera la caducidad**, esto ya que la figura de la caducidad se debe analizar con apego al artículo 99 del Código Fiscal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) vigente en los años dos mil catorce y dos mil quince en el que se estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 99. Las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales derivados de contribuciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones de este Código, así como determinar responsabilidades resarcitorias, se extinguirán en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que:

I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante, lo anterior cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que se presenten, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio;





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



JUSTICIA
TIVA DE
MÉXICO
GENERAL
RDOS

II. Se presentó o debió haberse presentado declaración que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración;

III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente;

IV. Se hubiere cometido la conducta que causa el daño o perjuicio a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de las entidades, y

V. Se presentó el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por un Contador Público registrado, siempre que éste no dé origen a la presentación de declaraciones complementarias por dictamen, toda vez que en caso contrario se estará a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo.

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años cuando el contribuyente omita realizar alguno de los siguientes actos:

a) Inscribirse ante la autoridad fiscal en los padrones que le corresponda o no presente los avisos que modifiquen los datos registrados en éstos.

b) Presentar declaraciones en los términos que disponga este Código.
En este caso, el plazo será de cinco años si el contribuyente presenta en forma espontánea y sin que haya sido requerida la declaración omitida. No podrá ser sumado el tiempo transcurrido desde la fecha en la que debió ser presentada con el que trascurra posterior a su presentación.

El plazo señalado en este artículo no estará sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación o se notifique el requerimiento de obligaciones omitidas por las autoridades fiscales; o cuando se inicien procedimientos de responsabilidad resarcitoria; se interponga algún recurso administrativo o juicio; cuando las autoridades no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En los dos últimos casos se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en que se localice al contribuyente.

El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación o la notificación del requerimiento de obligaciones omitidas y la instauración de procedimientos resarcitorios, inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal. Para el caso del ejercicio de las facultades de comprobación o la notificación del requerimiento de obligaciones omitidas, la suspensión a que se refiere este párrafo estará condicionada a que dentro de los doce meses siguientes al inicio de las facultades de comprobación o la notificación del requerimiento de obligaciones omitidas, se levante acta final, se emita oficio de observaciones o se dicte la resolución definitiva, a efecto de que opere la suspensión. Asimismo, para el caso de la instauración del procedimiento

resarcitorio dicha suspensión estará condicionada a que dentro de los plazos establecidos por el artículo 458 de este Código, se dicte la resolución que corresponda en el procedimiento resarcitorio. De no cumplirse estas condiciones se entenderá que no hubo suspensión.

No será necesario el levantamiento de las actas a que se refiere el párrafo anterior, cuando iniciadas las facultades de comprobación se verifiquen los supuestos señalados en los incisos a) y b) de la fracción X del artículo 90 de este Código.

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.

Así también, es aplicable lo dispuesto en el artículo 131 primer párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), vigentes en los años dos mil catorce y dos mil quince, el cual regula lo siguiente:

ARTICULO 131.- El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante declaración ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría o auxiliares autorizados.

(...)

Así, de lo anterior se advierte que, **sí se configura a favor del accionante la figura jurídica de la caducidad** de las facultades de la enjuiciada para la determinación del pago del impuesto predial de los **bimestres**

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCC

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX pues como se ha determinado anteriormente, respecto al último periodo respecto del que la demandante solicita la caducidad, es decir, del **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**, que comprende a los meses de **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** el cual se hizo exigible el uno de **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** el término conforme a lo establecido en el normativo 99, fracción II del Código Fiscal de la Ciudad de México citado, corrió desde el momento en que era exigible su pago, es decir, **desde** **DATO PERSONA**

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

siendo el caso que para la fecha en que la accionante presentó su solicitud de extinción de las facultades fiscales ante la autoridad demandada, es decir, el trece de julio de dos mil veintiuno, **ya habían caducado las facultades de la autoridad demandada para determinar créditos fiscales por los periodos señalados**, pues si la caducidad opera respecto al último bimestre de los cuales la parte actora pidió la caducidad, resulta evidente que de los

TAL
ADM
CI
SEC



Tribunal de Justicia
 Administrativa
 de la
 Ciudad de México

bimestres anteriores de igual manera se actualiza la caducidad solicitada, y por lo tanto, procede declarar la nulidad de la resolución administrativa de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente fiscal **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** por el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Ciudad de México.

Asimismo, por lo que hace a los bimestres que van del segundo al quinto de dos mil quince, también opera la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal, pues tomando en consideración el último bimestre mencionado, es decir,

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIP

por lo que el término conforme a lo establecido en el normativo 99, fracción II del Código Fiscal de la Ciudad de México citado, corrió desde el momento en que era exigible su pago, es decir, de conformidad con el artículo 172 primer párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México, desde

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

No obstante, este Pleno Jurisdiccional no pasa por desapercibido que en el año dos mil veinte se suspendieron los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativo y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del COVID 19, lo cierto es que del "QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19", publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del que se desprende que dicha suspensión de plazos ocurrió del veintitrés de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, de ahí que de entre ambas fechas se desprende que fueron un total de sesenta y ocho días suspendidos, tal como se desprende del siguiente calendario:



TRIBUNAL DE JUSTICIA
 ADMINISTRATIVA
 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DOM	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX						

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DOM	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX						

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DOM	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX						



Así, de los cuadros anteriores se desprende que entre el periodo del veintitrés de marzo de dos mil veinte, al veintinueve de mayo del mismo año, transcurrieron sesenta y ocho días, esto de conformidad al “QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19”, por lo que, de la fecha en que se concluye el término de cinco años, es decir del uno de noviembre de dos mil veinte, se le tienen que sumar los sesenta y ocho días suspendidos por la pandemia generada por el virus SARSCOV-2 (COVID-19), de ahí que, las facultades de la autoridad demandada para determinar el crédito fiscal en contra de la parte actora



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

caducaron hasta el ocho de enero de dos mil veintiuno, tal como se aprecia a continuación:

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DOM	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX						

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DOM	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX						

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DOM	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX						

De lo anterior, se desprende que sumando los sesenta y ocho días de suspensión ocurridos del veintitrés de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, en virtud del acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, al uno de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que transcurrieron los cinco años desde que el crédito se volvió exigible, el termino concluyó el ocho de enero de dos mil veintiuno.

Y si en el presente caso, la parte actora presentó su solicitud de extinción de las facultades fiscales ante la autoridad demandada, el trece de julio de dos



JUSTICIA
IVABEL
MEXICO
ENERAI

mil veintiuno, para entonces **ya habían caducado las facultades de la autoridad demandada para determinar créditos fiscales por los bimestres que van del segundo al quinto de dos mil quince**, pues si la caducidad opera respecto al último bimestre de los cuales la parte actora pidió la caducidad, resulta evidente que a los bimestres anteriores de igual manera se actualiza la caducidad solicitada, y por lo tanto, procede declarar la nulidad de la resolución administrativa de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente fiscal **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** por el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Ciudad de México.

XII. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.

Jurídicamente argumentado lo que antecede y con fundamento en lo previsto por el artículo 100 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se **declara la nulidad** de la resolución impugnada de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente fiscal **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**, por el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Ciudad de México, quedando obligada la autoridad demandada, a llevar a cabo las acciones tendientes a efectuar en el sistema electrónico de la autoridad fiscal correspondiente, la actualización en cuanto a la caducidad de las facultades fiscalizadoras por concepto de impuesto predial, respecto a los periodos del **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando XI del presente fallo.

Lo anterior, dentro del plazo de **QUINCE DÍAS HÁBILES** siguientes a aquel en que quede firme el presente fallo.

Por lo expuesto, y con fundamento en los 1, 15, fracción VII, 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como los diversos 116, 117 y 118 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se

RESUELVE



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

PRIMERO. Este Pleno Jurisdiccional es competente para conocer y resolver el recurso de apelación **RAJ.1007/2024**, interpuesto por Nancy González Ortiz, Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la autoridad demandada en el presente juicio, en contra de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, en el juicio de nulidad número **TJ/I-52103/2023**.

SEGUNDO. Conforme a lo expuesto en el Considerando **VII** de esta resolución, el **único** agravio expresado por la autoridad demandada en el recurso de apelación **RAJ.1007/2024** resultó **FUNDADO** para revocar la sentencia de primera instancia.

TERCERO. Se **REVOCA** la sentencia pronunciada por la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en los autos del juicio contencioso administrativo número **TJ/I-52103/2023**.

CUARTO. No se sobresee el presente juicio por las razones expuestas en el Considerando **IX** de este fallo.

QUINTO. Se **declara la nulidad** de la resolución impugnada de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quedando obligada la autoridad demandada a dejar sin efectos la misma, y en su lugar emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado, en el que deberá llevar a cabo llevar a cabo las acciones tendientes a efectuar en el sistema electrónico de la autoridad fiscal correspondiente, la actualización en cuanto a la caducidad de las facultades fiscalizadoras por concepto de impuesto predial, respecto a los periodos del **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando **XI** del presente fallo.



SEXTO. Para garantizar el acceso a la impartición de justicia, se les hace saber a las partes que en contra de la presente resolución podrán interponer los medios de defensa procedentes en términos del artículo 119 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y asimismo se les comunica que, en caso de duda, en lo referente al contenido del presente fallo podrán acudir ante la Magistrada Ponente.

SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase a la Sala de origen el expediente del juicio de nulidad citado al rubro y, en su oportunidad, archívese las actuaciones del recurso de apelación número **RAJ.1007/2024**.

**SIN
TEXTO**



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

Tribunal de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México



PA - 003046 - 2024

#30 - RAJ.1007/2024 - APROBADO		
Convocatoria: C-14/2024 ORDINARIA	Fecha de pleno: 17 de abril del 2024	Ponencia: SS Ponencia 7
No. juicio: TJ/I-52103/2023	Magistrado: Doctora Mariana Moranchel Pocatterra	Páginas: 39

ASÍ POR MAYORÍA DE SIETE VOTOS Y DOS EN ABSTENCIÓN DE LAS MAGISTRADAS Y LOS MAGISTRADOS PRESENTES, LO RESOLVIÓ EL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO INTEGRADO POR LOS C.C. MAGISTRADOS LICENCIADO JOSÉ RAÚL ARMIDA REYES, MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE, EN VIRTUD DE LA AUSENCIA DERIVADA DE LA LICENCIA CONCEDIDA A LA MAGISTRADA PRESIDENTA DE ESTE TRIBUNAL, DOCTORA ESTELA FUENTES JIMÉNEZ, LICENCIADA LAURA EMILIA ACEVES GUTIÉRREZ, DOCTOR JESÚS ANLÉN ALEMÁN, MAESTRO JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN VOTA EN ABSTENCIÓN, MAESTRA REBECA GÓMEZ MARTÍNEZ, DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA, DOCTORA XÓCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, QUIEN VOTA EN ABSTENCIÓN Y EL LICENCIADO ANDRÉS ÁNGEL AGUILERA MARTÍNEZ.

FUE PONENTE EN ESTE RECURSO DE APELACIÓN LA C. MAGISTRADA DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 6 PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 8 PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, 9, 15 FRACCIONES VII Y VIII, 16 Y 48 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 1, 8 INCISO 2), 10 Y 15 FRACCIONES I Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 116 Y 117 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR ACUERDO TOMADO POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO JURISDICCIONAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, FIRMAN LA PRESENTE RESOLUCIÓN EL MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE LICENCIADO JOSÉ RAÚL ARMIDA REYES, ANTE EL C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "I", QUIEN DA FE.

MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE

MAG. LICENCIADO JOSÉ RAÚL ARMIDA REYES

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "I"

MTRO. JOACIM BARRIENTOS ZAMUDIO

EL MAESTRO JOACIM BARRIENTOS ZAMUDIO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "I" DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE PÁGINA ES PARTE INTEGRANTE DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.1007/2024 DERIVADO DEL JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-52103/2023, PRONUNCIADA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DE ESTE TRIBUNAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO, CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS SE TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN: "PRIMERO. Este Pleno Jurisdiccional es competente para conocer y resolver el recurso de apelación RAJ.1007/2024, interpuesto por Nancy González Ortiz, Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la autoridad demandada en el presente juicio, en contra de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, en el juicio de nulidad número TJ/I-52103/2023. SEGUNDO. Conforme a lo expuesto en el Considerando VII de esta resolución, el único agravio expresado por la autoridad demandada en el recurso de apelación RAJ.1007/2024 resultó FUNDADO para revocar la sentencia de primera instancia. TERCERO. Se REVOCA la sentencia pronunciada por la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en los autos del juicio contencioso administrativo número TJ/I-52103/2023. CUARTO. No se sobresee el presente juicio por las razones expuestas en el Considerando IX de este fallo. QUINTO. Se declara la nulidad de la resolución impugnada de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quedando obligada la autoridad demandada a dejar sin efectos la misma, y en su lugar emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado, en el que deberá llevar a cabo llevar a cabo las acciones tendientes a efectuar en el sistema electrónico de la autoridad fiscal correspondiente, la actualización en cuanto a la caducidad de las facultades fiscalizadoras por concepto de impuesto predial, respecto a los periodos del cuarto de dos mil trece al quinto de dos mil quince, por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando XI del presente fallo. SEXTO. Para garantizar el acceso a la impartición de justicia, se les hace saber a las partes que en contra de la presente resolución podrán interponer los medios de defensa procedentes en términos del artículo 118 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y asimismo se les comunica que, en caso de duda, en lo referente al contenido del presente fallo podrán acudir ante la Magistrada Ponente. SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase a la Sala de origen el expediente del juicio de nulidad citado al rubro y, en su oportunidad, archívese las actuaciones del recurso de apelación número RAJ.1007/2024."



U.S. DEPARTMENT OF
COMMERCE
BUREAU OF
MARINE FISHERIES
WASHINGTON, D.C.